



## RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

### SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, once (11) de abril de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO:	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE:	LUZ STELLA MUNERA PIEDRAHITA
DEMANDADOS:	COLPENSIONES
RADICADO:	0500103105 – 010-2014-00238-01
ACTA N°:	027

En la fecha indicada, la Sala Sexta de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, se constituyó en audiencia pública en el proceso de trámite ordinario laboral de primera instancia promovido por LUZ STELLA MUNERA PIEDRAHITA en contra de COLPENSIONES, para pronunciarse en virtud del **GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA** a favor de la **DEMANDANTE**, frente a la sentencia con la cual el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín finalizó la primera instancia.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 027** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

#### 1. ANTECEDENTES

##### 1.1. LA DEMANDA<sup>1</sup>

La demandante pretende con este proceso se reliquide la pensión de vejez teniendo como IBL de los últimos 10 años cotizados \$3.820.000 y 1.170 semanas entre el sector público y privado con una tasa del 84%, intereses moratorios e indexación de la condena al momento de su pago efectivo.

Para sustentar sus pretensiones se afirmó, en síntesis: **i)** La señora LUZ STELLA MUNERA PIEDRAHITA fue pensionada por COLPENSIONES con Resolución GNR 016880 del 27 de febrero de 2013 con un 81% de \$1.409.619. Se le reconoció el porcentaje con 1.100 semanas, sin tener en cuenta que supera 1.150 semanas cotizadas al RPM. **ii)** Laboró en

<sup>1</sup> Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo 02Expediente1020140238 / Págs. 4-7 y 275-278

la Contraloría, presentando el bono pensional a COLPENSIONES al momento de solicitar la pensión de vejez.

**1.2. COLPENSIONES** contestó oponiéndose a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, proponiendo como excepciones<sup>2</sup>: INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION DE RELIQUIDAR LA PENSIÓN DE VEJEZ EN LOS TÉRMINO SOLICITADOS, IMPROCEDENCIA DE SANCIÓN POR NO PAGO OPORTUNO O INTERESES MORATORIOS, BUENA FE, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS, PRESCRIPCIÓN, COMPENSACIÓN, EXCEPCIÓN INNOMINADA.

Posteriormente, ya en el transcurso del proceso, COLPENSIONES mediante Resolución GNR 166457 del **13 de mayo de 2014**<sup>3</sup> reliquidó la pensión de la demandante con un **IBL** de **\$2.934.323** y una tasa de **68.91%** por **1.391** semanas cotizadas.

## **2. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

Mediante sentencia del **19 de septiembre de 2016** la Juez ABSOLVIÓ de todas las pretensiones de la demanda y CONDENÓ en COSTAS a la parte actora<sup>4</sup>. Para adoptar esta determinación planteó, en síntesis: i) Si bien de acuerdo con la jurisprudencia de constitucional resulta procedente la posibilidad de acumular tiempos públicos y privados para los beneficiarios del régimen de transición (**SU-769 – 2014**), en el caso de la demandante se acredita la pérdida del régimen de transición por haberse trasladado al RAIS, porque si bien regresó al RPM tenía menos de 15 años de servicio a la entrada en vigencia de la Ley 100 del 93. Invoca las sentencias **C-789 de 2002**, **SU-062 de 2010** y **SU-130 de 2013**. Así, concluye que **no le asiste derecho a la aplicación del decreto 758 de 1990** para acceder a una tasa de **reemplazo del 84%** siendo en consecuencia aplicable en su caso particular el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 797 de 2003 tal como lo hizo la entidad accionada. ii) De otro lado liquidó el **IBL** de los últimos **10 años** entre el **1 de diciembre de 2002** y el **30 de diciembre de 2012** y obtuvo la suma de **\$2.983.504** y al aplicar la fórmula del **artículo 10 de la Ley 797 de 2003** una **tasa de reemplazo del 66%** para una mesada pensional de **\$1.969.112**, inferior a la reconocida de **\$2.022.042**

## **3. TRÁMITE, COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA**

<sup>2</sup> Ídem / Págs. 292-295

<sup>3</sup> Ídem / Págs. 311-318

<sup>4</sup> Carpeta 01PrimeraInstancia / Archivo 05Sentencia1020140238 / Min. 4:50-20:20

Una vez corrido traslado para formular alegatos de conclusión en esta instancia<sup>5</sup>, el apoderado de COLPENSIONES intervino oportunamente de la siguiente manera<sup>6</sup>: Solicita se confirme la decisión absolutoria toda vez que en la Resolución GNR 166457 del 13 de mayo de 2014 se reliquidó la pensión de vejez en los términos de la sentencia SU-062 de 2010 realizando el estudio con base en la Ley 797 de 2003 y arrojó un IBL de \$2.022.042 con base en el 68,91%. El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín en audiencia del 19 de septiembre de 2016 basó la liquidación con un porcentaje del 66%. Obteniendo una pensión de \$1.969.112

Ahora, habiéndose determinado el cambio de ponente con providencia del **7 de octubre de 2022**<sup>7</sup>, se decretaron pruebas de oficio<sup>8</sup> y una vez fueron allegadas al plenario se pusieron en conocimiento de las partes<sup>9</sup>, quienes guardaron silencio.

Pues bien, se ha proferido una **DECISION ABSOLUTORIA** el acervo probatorio para identificar si el traslado de la demandante al RAIS afectó el derecho a pensionarse con los beneficios del régimen de transición a pesar de que se hubiese radicado inicialmente en cabeza suya por tener más de 35 años al 1 de abril de 1994, sin que tuviese 15 años de servicio a dicha fecha. Y a partir de ahí, verificar en su caso, cual es el régimen anterior aplicable para efectos de definir si le asiste el derecho a un reajuste de la mesada pensional.

#### **4. SOBRE EL DERECHO AL REAJUSTE DE LA PENSION DE VEJEZ - EL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL EN CASOS COMO EL PRESENTE**

En la sentencia se concluyó que en este caso se acredita la pérdida del régimen de transición porque la demandante se trasladó al RAIS, y si bien regresó al RPM tenía menos de 15 años de servicio a la entrada en vigencia de la Ley 100 del 93. Invoca las sentencias **C-789 de 2002, SU-062 de 2010 y SU-130 de 2013** para concluir que no le asiste derecho a la aplicación del decreto 758 de 1990 para acceder a una tasa de reemplazo del 84% siendo en consecuencia aplicable en su caso particular el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 797 de 2003 tal como lo hizo la entidad accionada.

<sup>5</sup> Artículo 15 Decreto 806 de 2020

<sup>6</sup> Carpeta 02SegundaInstancia / Archivo 12MemorialAlegatosSustitucionColpensiones

<sup>7</sup> SEGUNDA INSTANCIA – archivo 15

<sup>8</sup> SEGUNDA INSTANCIA – archivo 18

<sup>9</sup> SEGUNDA INSTANCIA – archivo 24

Efectivamente se comprueba con la prueba decretada en esta instancia, que la señora LUZ STELLA MUNERA PIEDRAHITA estando afiliada al **I.S.S.** y vinculada laboralmente a DEPORBELLO, **el 20 de mayo de 1998** se trasladó a **PROTECCIÓN**<sup>10</sup>.

Este aspecto resulta absolutamente relevante, porque conforme el **artículo 36 inciso 4 de la Ley 100**, el régimen de transición no se aplica para las personas que voluntariamente se hubieren acogido al RAIS, salvo para aquellos que hubiesen cumplido quince (15) años o más de servicios cotizados, al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social en pensiones de la Ley 100 de 1993, en los términos de la sentencia **C-789-02**.

Y se advierte que la demandante nació el **9 de junio de 1955**<sup>11</sup>, por lo que resulta claro que tenía más de 35 años de edad al **1 de abril de 1994**, fecha en que entró en vigencia del sistema general de pensiones en su caso, por estar vinculada a una sociedad del sector privado (**TRANSPORTES HATOVIEJO S.A.**)<sup>12</sup>. Pero es claro que a dicha fecha no tenía más de 15 años de servicios, aun sumando las semanas cotizadas al I.S.S. a través de diferentes empleadores a partir del 21 de enero de 1974 con el tiempo público laborado en la Contraloría General de Antioquia entre el **20 de abril y 30 de agosto de 1992**<sup>13</sup> y con el Municipio de Bello entre el **9 de marzo de 1994 y el 14 de mayo de 1995**, lo que en principio llevaría a concluir que no resulta procedente acceder a la pretensión de reajuste pensional, en razón de la pérdida del beneficio de la transición por el traslado de régimen.

Pero la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado un precedente en casos como el que hoy ocupa la atención de la Sala en los que la demandada es la administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, y se discute el derecho pensional como **beneficiaria del régimen de transición** a pesar de que se acredite en el proceso un **traslado de régimen al RAIS sin acreditar 15 años de servicios** a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones: **SL 12136 – 2014 , SL 9519 – 2015 entre otras**. En el precedente se explica que en materia de seguridad social el juez no puede ignorar que por la trascendencia de los derechos pensionales, la información del traslado de régimen debe ser de transparencia máxima y por ello, no pueden pasar inadvertidas falencias informativas y mucho menos considerar que ello no es de su resorte, porque es claro que cuando quien acude a la jurisdicción reclama que se le respete el régimen de transición, indiscutiblemente surge la perentoriedad de estudiar

<sup>10</sup> Carpeta 02SegundaInstancia / Archivo 21FormularioAfiliaciónProtección

<sup>11</sup> Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo 02Expediente1020140238 / Pág. 8

<sup>12</sup> Ídem / Pág. 51

<sup>13</sup> Ídem / Pág. 287

los elementos estructurales para que el mismo opere, y por ello, se debe constatar que el traslado se produjo en términos de eficacia, para luego, determinar las consecuencias propias.

Por esta razón, cuando lo que se discute es el traslado de regímenes que conlleve a la pérdida de la transición, al juzgador no solo le corresponde determinar si aquella se respeta por contar con los 15 años de servicio a la entrada de vigencia de la Ley 100 de 1993, sino que se debe determinar, previamente, por tratarse de un presupuesto de eficacia, si ese traslado estuvo ajustado a los principios que gobiernan el Estatuto de Seguridad Social y a las reglas de libertad de escogencia del sistema, lo que está sujeto a la comprobación de que existió una decisión documentada, precedida de las explicaciones sobre los efectos del traslado, en todas sus dimensiones legales.

Pues bien, acogiendo el precedente jurisprudencial referido, se decretaron las pruebas de oficio dirigidas a indagar si la demandante efectivamente suscribió un formulario de traslado al RAIS y si recibió la asesoría necesaria para poder afirmar que éste fue eficaz, por tratarse de una decisión libre, voluntaria e informada. Fue así como se aportó copia del formulario de VINCULACIÓN a PROTECCIÓN<sup>14</sup>, y ante el requerimiento efectuado por la Sala sobre si se efectuó asesoría antes de que la demandante suscribiera el formulario, la AFP contestó lo siguiente<sup>15</sup>:

Respecto a la asesoría, se informa que Protección S.A siempre se ha caracterizado por su actuar responsable, diligente y con apego a la ley, por lo cual siempre brinda un acompañamiento constante a sus afiliados; en la asesoría que se brindó al demandante se informaron los parámetros legales generales de la época para el cálculo del monto de la pensión, sin embargo, vale la pena insistir que el monto de la pensión o valor de la mesada pensional en el Régimen de Ahorro Individual es VARIABLE y sólo se determina a largo plazo pues depende del movimiento de la cuenta de ahorro individual a lo largo de la vida, los aportes realizados, los cambios normativos, la redención del bono pensional y de la rentabilidad, la cual es de largo plazo, y en esa medida en aquella época el valor de la mesada se informaba a través de proyecciones pensionales verbales que no se extendían a ninguna clase de documento, y que se realizaban teniendo en cuenta el salario y los beneficiarios al momento de la afiliación dejando claro que sólo eran estimativos o meras aproximaciones de las cuales no se podía extraer una expectativa legítima.

No obstante lo anterior, debe recordarse que NO ERA UNA OBLIGACIÓN LEGAL del asesor de aquella época (año 1995) realizar alguna proyección de índole técnica o financiera pues dicha obligación sólo surge para las AFP con la Ley 1748 de 2014 y Decreto 2071 de 2015, y como ya se anotó, a tan temprana edad de la demandante, sin saber cuánto tiempo iba a permanecer en el RAIS, los rendimientos que generaría la cuenta, el salario base de cotización, el valor con el que se negocie su bono pensional y los beneficiarios, cualquier cálculo estaría sujeto a múltiples variaciones.

<sup>14</sup> Carpeta 02SegundaInstancia / Archivo 21FormularioAfiliaciónProtección

<sup>15</sup> Carpeta 02SegundaInstancia / Archivo 20RespuestaOficio

Pues bien, en criterio de esta Sala de Decisión, para poder concluir que la SEÑORA LUZ STELLA MUNERA PIEDRAHITA estuvo válidamente afiliada en el RAIS y que por esa razón perdió los beneficios del régimen de transición a pesar de regresar a COLPENSIONES, debe existir prueba en el proceso de que le fue brindada una **asesoría personalizada** analizando **las circunstancias particulares** de su caso para poder predicarse que fue un acto jurídico celebrado de manera libre. Debe insistirse en que la labor del funcionario de PROTECCIÓN en esa ETAPA PREVIA Y PREPARATORIA a la formalización del traslado, no sólo debía ser completa y comprensible para la señora MUNERA PIEDRAHITA, sino que debía trascender al “deber del buen consejo” mostrándole con detalle las diferentes alternativas, los beneficios e inconvenientes de tomar la decisión de traslado, para evitar que ella tomara una opción que claramente lo perjudicaba, advirtiéndole de los efectos relacionados con la pérdida del régimen de transición.

Siendo, así las cosas, es claro que en este proceso no se ha acreditado que a la demandante se le hubiese brindado la información necesaria para poder predicar que la decisión de traslado proviene de una manifestación libre y voluntaria, y por ello, a la luz de lo previsto en los artículos **13 literal b y 272 de la Ley 100**, en concordancia con los **artículos 53 y 48 de la Constitución Política**, debe concluirse que carece de eficacia el traslado de régimen. Por esta razón, en este caso no resulta procedente aplicar lo previsto en el artículo 36 inciso 4 de la Ley 100, que consagra la pérdida del régimen de transición sólo para las personas que de manera libre y voluntaria se acogieran al régimen de ahorro individual con solidaridad. En efecto, con providencia **SL2929-2022** referido al caso de una afiliada del I.S.S. que se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS) el 13 de julio de 1998 y posteriormente regresó al Régimen de Prima Medio siéndole reconocida la pensión de vejez bajo los parámetros de la Ley 797, la Alta Corporación explicó:

Precisamente en este asunto Colpensiones se negó a reconocerle a la demandante la pensión de vejez del Acuerdo 049 de 1990, bajo el argumento de que, si bien era titular del régimen de transición por edad y retornó al RPMPD en virtud de una orden de tutela, solo podían recuperar los beneficios del régimen de transición quienes a 1.º de abril de 1994 tuvieran 15 años o más de servicios cotizados; situación en la que aquella no se encontraba.

Sin embargo, en la medida que la ineficacia del cambio de régimen pensional implica que el afiliado nunca abandonó el RPMPD, ello significa a su vez que el traslado realizado hacia el RAIS no tiene relevancia jurídica, pues ha de entenderse que nunca ocurrió. En otros términos, el supuesto de hecho de los incisos 4.º y 5.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, conforme a los cuales quienes se trasladen voluntariamente al RAIS, a menos que tengan 15 años o más de servicios cotizados, pierden el régimen de transición (C-789-2002), no se configura cuando se declara la ineficacia del traslado, pues al amparo de esta figura ha de darse por sentado que las repercusiones jurídicas que se esperaban con la suscripción del traslado jamás ocurrieron, o lo que es igual, que el afiliado jamás se trasladó al RAIS.



Por este motivo, el argumento de la recurrente es atinado, **toda vez que el Tribunal pese a comprobar el incumplimiento del deber de información y que lo pertinente era declarar que el acto de cambio de régimen pensional no produjo efectos, se sustrajo inexplicablemente de actuar de forma consecuente, esto es, de declarar la ineficacia del traslado y aplicar las consecuencias propias de esta decisión: que no hubo un traslado de régimen pensional, que por tanto la actora siempre permaneció en el RPMPD y por ende conservó los beneficios del régimen de transición.**

Habiéndose dilucidado lo anterior, debemos ahora verificar cual es el régimen pensional anterior de la demandante, debiéndose destacar que: **i) LUZSTELLA MÚNERA PIEDRAHÍTA nació el 9 de junio de 1955<sup>16</sup>, por lo que resulta claro que tenía más de 35 años de edad al 1 de abril de 1994; ii) No la afectó el A.L. 1 de 2005, porque aunque su derecho se causó después del 31 de julio de 2010, tenía más de 750 semanas cotizadas a la entrada en vigencia del acto legislativo, por lo que el régimen de transición se extendió para su caso hasta el 31 de diciembre de 2014.**

De acuerdo con lo anterior, el régimen pensional de la actora es el consagrado en el **Decreto 758 de 1990**, porque había efectuado cotizaciones al I.S.S. con varios empleadores del sector privado, y a este será al que se accederá con el 90% sobre **IBL** con el que se reconoció la pensión. Lo anterior, porque las pruebas del proceso nos muestran que a lo largo de toda su vida ha cotizado un total de 1391 semanas, aspecto definido por la entidad al momento del reconocimiento pensional, acto administrativo en el que se suman las semanas cotizadas y el tiempo laborado para la Contraloría.

Sobre la posibilidad de sumar tiempo público con semanas cotizadas para conceder la pensión de vejez aplicando el DECRETO 758 de 1990, hasta ahora se había presentado diversidad de criterios entre las Altas Cortes: **i) La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia** señalaba que el requisito de 1000 semanas o de 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad consagrado en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 solo se satisface con semanas efectivamente cotizadas, sin que resultara procedente sumar tiempo público no cotizado (Radicado 23 611 del 4 de noviembre de 2004, SL 13260 2015, SL994-2018, SL1972-2019 y Expediente 78255 (965) de 2020). Pero efectuando un nuevo estudio del asunto, en sentencias **SL 1947, SL 1981 y SL 2557 de 2020** consideró pertinente modificar el anterior precedente jurisprudencial para establecer que las pensiones de vejez contempladas en el Acuerdo 049 de 1990 pueden consolidarse con semanas cotizadas al I.S.S. y con tiempos laborados a entidades públicas. **ii) Por su parte, la Corte Constitucional** desde la sentencia **T – 090 de febrero 17 de 2009** ha considerado procedente tal sumatoria, reiterando su precedente en sentencias como la **SU – 769 de 2014, T 370 de 2016, T 508 de 2017, SU 057 de 2018, T 088**

<sup>16</sup> Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo 02Expediente1020140238 / Pág. 8

– 2019, T 401 y T 522 -2020 entre muchas otras. **iii)** Se advierte entonces que para el momento en que se profiere esta providencia, la posición de las dos Cortes se encuentra unificada.

Siendo así las cosas, se REVOCARÁ la decisión de primera instancia, para en su lugar CONDENAR al reajuste de la pensión de vejez, con una tasa del **90%** sobre el **IBL** de **\$2.934.323** para un valor inicial de **\$2.640.890**, superior al reconocido por **COLPENSIONES** de **\$2.022.042** en la **Resolución del 13 de mayo de 2014**, acto administrativo en el que utilizó una tasa del **68.91%** al aplicar como régimen pensional el de la Ley 797 de 2003 argumentando la pérdida de los beneficios de transición por haberse trasladado al RAIS<sup>17</sup>.

**COLPENSIONES** propuso la excepción de **PRESCRIPCION**, pero de acuerdo a lo previsto en los artículos 6 y 151 del Código Procesal del Trabajo es claro que en este caso no ha prescrito reajuste alguno: **i)** La pensión fue reconocida con **Resolución GNR 016880 del 27 de febrero de 2013** a partir del **1 de diciembre de 2012**<sup>18</sup>. **ii)** La demanda fue instaurada el **21 de febrero de 2014**<sup>19</sup>. En virtud del recurso interpuesto se emitió en el transcurso del proceso la **Resolución GNR 166457 del 13 de mayo de 2014**.

Así, el **RETROACTIVO** del reajuste va desde el **1 de diciembre de 2012**. Y se calcula hasta marzo de 2023, con **13 mesadas al año**, porque aunque el derecho se causó antes del **31 de julio de 2011**, la mesada es superior a 3 salarios mínimos

REAJUSTE PENSIONAL						
Año	IPC	Valor reconocido	Valor real	Diferencia mensual	# mesadas	Total retroactivo
2012	2,44%	\$ 2.022.042	\$ 2.640.890	\$ 618.848	1	\$ 618.848
2013	1,94%	\$ 2.071.380	\$ 2.705.328	\$ 633.948	13	\$ 8.241.323
2014	3,66%	\$ 2.111.565	\$ 2.757.811	\$ 646.246	13	\$ 8.401.204
2015	6,77%	\$ 2.188.848	\$ 2.858.747	\$ 669.899	13	\$ 8.708.688
2016	5,75%	\$ 2.337.033	\$ 3.052.284	\$ 715.251	13	\$ 9.298.267
2017	4,09%	\$ 2.471.412	\$ 3.227.790	\$ 756.378	13	\$ 9.832.917
2018	3,18%	\$ 2.572.493	\$ 3.359.807	\$ 787.314	13	\$ 10.235.083
2019	3,80%	\$ 2.654.298	\$ 3.466.649	\$ 812.351	13	\$ 10.560.559
2020	1,61%	\$ 2.755.162	\$ 3.598.382	\$ 843.220	13	\$ 10.961.860
2021	5,62%	\$ 2.799.520	\$ 3.656.316	\$ 856.796	13	\$ 11.138.346
2022	13,12%	\$ 2.956.853	\$ 3.861.801	\$ 904.948	13	\$ 11.764.321
2023		\$ 3.344.792	\$ 4.368.469	\$ 1.023.677	4	\$ 4.094.708
TOTAL						\$ 103.856.123

<sup>17</sup> Carpeta 01PrimeralInstancia / Archivo 02Expediente1020140238 / Pág. 315

<sup>18</sup> Ídem / Pág. 24

<sup>19</sup> Ídem / Pág. 7



COLPENSIONES seguirá pagando a la demandante **a partir del mes de mayo de 2023** una mesada pensional de **\$ 4.368.469**, que se incrementará anualmente de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 100, y la mesada adicional de noviembre. La entidad descontará del valor del retroactivo los aportes en salud, los que operan por mandato legal (**SL 1169 de 2019**)

No se condenará a intereses moratorios sobre el reajuste, pues si bien la actora interpuso recurso en contra del acto administrativo que le reconoció la pensión buscando incrementar su valor, lo cierto es que es en el marco de este proceso, a partir del criterio jurisprudencial aplicado<sup>20</sup> y con ocasión de las pruebas de oficio decretadas, que se ha verificado la ausencia de asesoría previa al traslado de régimen para concluir que éste carece de eficacia por lo que no resulta procedente aplicar lo previsto en el artículo 36 inciso 4 de la Ley 100 sobre la pérdida del régimen de transición. De este modo, en este proceso, no se ha acreditado incumplimiento o tardanza imputable a COLPENSIONES que justifique una condena en su contra por este concepto. Pero se **CONDENARÁ** a la **INDEXACION** de este retroactivo, porque el valor de los reajustes que aquí se ordenan debieron ingresar al patrimonio de la demandante años atrás, de manera que, cuando la entidad realice el pago, se verán afectados por la devaluación de la moneda. Por eso deberá indexarse con siguiente fórmula y criterios:

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} \times \text{VALOR A INDEXAR} - \text{VALOR A INDEXAR} = \text{VALOR INDEXACIÓN}$$

Los valores con los que ha de remplazarse la fórmula deben ser:

**ÍNDICE FINAL** correspondiente al **IPC** para la **fecha en que haya de efectuarse el pago**

**ÍNDICE INICIAL** correspondiente al **IPC** para vigente **a la fecha en que debió efectuarse el pago de cada reajuste**

**VALOR A INDEXAR** que se refiere al **monto de cada reajuste**

Sobre las **COSTAS**, debe indicarse lo siguiente: **i)** Se **REVOCARÁ** la **CONDENA** en costas en primera instancia; **ii)** Y no se causan costas en segunda, atendiendo a las particularidades del caso concreto, en la medida en que la actora se había trasladado al RAIS y desde esa perspectiva, el reconocimiento pensional efectuado inicialmente con Ley 100 se encuentra ajustado al efecto consagrado en el inciso 4 del artículo 36 de dicho cuerpo normativo.

<sup>20</sup> **SL 12136 – 2014, SL 9519 – 2015 entre otras**

**LA DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, La Sala Sexta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, DECIDE:

**REVOCAR** la sentencia proferida por el Juzgado DÉCIMO Laboral del Circuito de Medellín, para en su lugar:

**PRIMERO: SE CONDENA a COLPENSIONES** al reajuste de la pensión de vejez de la señora LUZ STELLA MUNERA PIEDRAHITA identificada con C.C. 32.526.374 como beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el **Decreto 758 de 1990**, y como consecuencia de ello deberá pagar la suma de **CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SESIS MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS (\$103.856.123)** por concepto de reajuste de las mesadas pensionales causadas entre el **1 de diciembre de 2012 y el mes abril de 2023**, con la adicional de diciembre.

A partir del **1 de mayo de 2023**, la entidad continuará reconociendo la pensión en cuantía de **\$4.368.469**, mientras subsistan las causas que le dieron origen, con la mesada adicional de diciembre.

**SEGUNDO: SE CONDENA a COLPENSIONES** a pagar la indexación de cada reajuste al momento del reconocimiento del retroactivo pensional, liquidándola de acuerdo a la formula y criterio expuestos en la parte motiva.

**TERCERO: COLPENSIONES** descontará del retroactivo pensional, el valor de los aportes en salud sobre cada mesada, y los trasladará al Sistema General de Salud.

**CUARTO:** No se condena en costas en las instancias.



**ANA MARIA ZAPATA PEREZ**



**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**



**MARIA PATRICIA YEPEZ GARCÍA**

**Salva el voto**



RADICADO: 05001 31 05 010 2014 00238

SENTENCIA del //11/04/2023

Con este código puede acceder a la actuación de segunda instancia,  
**para ello debe tener una cuenta de Microsoft.** Enlace en caso de no tener  
lector QR: <https://etbcsj->

[my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des06sltsmed\\_cendoj\\_ramajudicial\\_gov\\_co/EmAv3ffMlcxNtj9MNTHHmUoBYJuWYwVbzxP5SPtiCwDF2A?e=EQP0BT](https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des06sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/EmAv3ffMlcxNtj9MNTHHmUoBYJuWYwVbzxP5SPtiCwDF2A?e=EQP0BT)

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL**

Medellín, 11 de abril de 2022

**SALVAMENTO DE VOTO**

DEMANDANTE	LUZ STELLA MÚNERA PIEDRAHÍTA
DEMANDADA	COLPENSIONES
ORIGEN	Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín
RADICADO	050013105010-2014-00238-01
TEMAS	Reliquidación y reajuste de pensión de vejez
CONOCIMIENTO	Consulta
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia del 11 de abril de 2023

Con el debido respeto, esta magistrada se aparta de la decisión mayoritaria que dispuso dentro del asunto referenciado revocar la sentencia proferida por el Juzgado DÉCIMO Laboral del Circuito de Medellín, para en su lugar: **CONDENAR a COLPENSIONES** al reajuste indexado de la pensión de vejez de la señora LUZ STELLA MUNERA PIEDRAHITA identificada con C.C. 32.526.374 como beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el **Decreto 758 de 1990**.

En el subexámine la señora Luz Stella Múnera Piedrahíta demandó contra Colpensiones la reliquidación y reajuste de su pensión de vejez, teniendo en cuenta el 84% de tasa de remplazo, previo cálculo de su Ingreso Base de Liquidación -IBL-, conformado por el promedio indexado de los 10 últimos años cotizados; más indexación de la condena.

Fundamentó sus pretensiones en que le fue reconocida pensión de vejez mediante resolución 201268003851 del 27 de febrero de 2013, aplicándose el 81% de tasa de remplazo a un IBL de \$1.409.619. Sus cotizaciones superaban los \$3.000.000, sin que se hubiera tenido su totalidad por cada empleador. Presentó a Colpensiones bono pensional por el tiempo laborado ante la Contraloría. Formuló reposición contra la resolución que reconoció la prestación y reclamación administrativa en los

términos de las pretensiones, sin que a la radicación de la demanda le hubiesen dado respuesta.

Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda porque al reconocer la pensión se le tuvieron en cuenta los periodos cotizados ante esta entidad y ante el extinto ISS; al ser beneficiaria del régimen de transición, teniéndose en cuenta el ingreso base de cotización -IBC- reportado por cada empleador. La historia laboral de la demandante, da cuenta de haber cotizado 1125 semanas. No le consta que ella hubiera laborado para entidades públicas y en el documento fechado el 31 de julio de 2013, que no cuenta con constancia de haber sido recibido por Colpensiones, se acepta no haberse aportado certificado de la Contraloría Departamental. Excepcionó: Inexistencia de la obligación de reliquidar la pensión de vejez en los términos solicitados, improcedencia de sanción por no pago oportuno o intereses moratorios, buena fe, imposibilidad de condena en costas, prescripción y compensación.

El 19 de septiembre de 2016, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia absolviendo a Colpensiones de las pretensiones invocadas en su contra por la demandante, a quien impuso el pago de costas procesales, fijando como agencias en derecho, la suma de \$689.454. Declaró próspera la excepción de inexistencia de la obligación de reliquidar la pensión de vejez en los términos solicitados.

Fundamentó su decisión en que la demandante no es beneficiaria del régimen de transición, al haberse trasladado al RAIS.

El proceso fue remitido en **Consulta**.

El proceso inicialmente fue repartido al despacho de la suscrita, cuya ponencia fue vencida por mayoría de los integrantes de la sala, pasando el expediente a la magistrada ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ cuyo proyecto fue avalado por el magistrado DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN.

Vistos los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por la demandada, para esta magistrada el **problema jurídico** se circunscribía a determinar: **a)** Si es procedente o no reliquidar y reajustar la pensión de vejez del demandante, dando aplicación al Acuerdo 049 de 1990, probado en Decreto 758 del mismo año, sumando a las semanas cotizadas, los tiempos de servicio ante entidades públicas. En caso de concluir que es así, se decidirá **b)** si hay o no lugar a indexar el valor de la condena.

Para este efecto se pronuncia respecto de esos tópicos así:

**a) Sumatoria de semanas cotizadas con tiempos de servicio/  
Reliquidación y reajuste de la mesada pensional del demandante**

La señora Luz Stella Múnera Piedrahíta nació el 9 de junio de 1955<sup>1</sup>, siendo beneficiaria del régimen de transición consagrado en el Art.36 de la Ley 100 de 1993, por tener más de 35 años de edad al 1 de abril de 1994, cuando para inició para ella la vigencia del actual sistema pensional, por ostentar la condición de empleada del Municipio de Bello<sup>2</sup>.

La normatividad anterior a la Ley 100 de 1993 que le era aplicable es diversa, pues al haber tenido semanas cotizadas como trabajadora dependiente del orden privado, hay lugar estudiar su derecho a la luz del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año y, al haber también ostentado la condición de empleada pública, podría mirarse la estructuración del derecho pensional a la luz de la Ley 33 de 1985 o de la Ley 71 de 1988.

Depreca la demandante se atienda a la contenida en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, cuyo art.12 le exige alcanzar la edad de 55 años y haber cotizado mínimo 1000 semanas en cualquier tiempo o 500 semanas durante los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima.

Ahora bien, el Acto Legislativo 01 de 2005, limitó la vigencia del régimen de transición hasta el 31 de julio de 2010, excepto para los beneficiarios que al 25 de julio de 2005 en que entró a regir dicha norma, reunieran al menos 750 semanas cotizadas y/o en tiempos laborados, extendiendo para ellos la transición hasta el año 2014 inclusive<sup>3</sup>.

La demandante alcanzó la edad de 55 años el 9 de junio de 2010, para cuando tenía satisfecho también el requisito de semanas<sup>4</sup>, aún sin tener en cuenta el periodo laborado al servicio de entidades públicas.

Se le reconoció pensión de vejez mediante resolución N°16880 del 27 de febrero de 2013, ordenando el disfrute desde el 29 de diciembre de 2012, ascendiendo la primera mesada a \$1.376.044<sup>5</sup> en atención a su condición de beneficiaria de transición, considerando únicamente las semanas cotizadas. Posteriormente, en resolución GNR166457 del 13 de mayo de 2014, Colpensiones reliquida su mesada pensional, esta vez atendiendo también a las semanas laboradas al servicio de entidades públicas,

---

<sup>1</sup> 01PrimeralInstancia; 01Expediente1020140238.pdf, pág. 8. No se aportó Registro Civil de Nacimiento pero si copia de la cédula de ciudadanía de la demandante que indica tal fecha, la cual no fue discutida por la pasiva.

<sup>2</sup> 01PrimeralInstancia; 01Expediente1020140238.pdf, págs. 364/373.

<sup>3</sup> Art.1 parágrafo transitorio 4°.

<sup>4</sup> 01PrimeralInstancia; 01Expediente1020140238.pdf, págs. 364/373.

<sup>5</sup> 04ExpedienteAdmnsitrativo; archivo denominado "GRF-AAT-RP-201268003585150-1361972531385.pdf"



concluyendo que cuenta con 1391 semanas cotizadas, por lo que procedió a aplicar el contenido de la Ley 797 de 2003, modificatoria de la Ley 100 de 1993, y otorgó una tasa de remplazo del 68.91% a un IBL de \$2.934.323, lo que arrojó una primera mesada pensional para 2012, de \$2.022.042<sup>6</sup>. En esa oportunidad ordenó pagar el retroactivo pensional derivado de la reliquidación.

Sin embargo, lo que pretende realmente la demandante es que aun aplicando el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, se tengan en cuenta tanto las semanas cotizadas para empleadores privados, como aquellos tiempos laborados al servicio de entidades públicas.

Al respecto, venía sosteniendo esta Sala de Decisión, conforme al precedente judicial construido por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia que la vincula, que el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año no permitía la acumulación o sumatoria de semanas cotizadas con tiempos de servicio cotizados o no; sin embargo, ante la nueva composición de esa alta corporación, mediante sentencias SL1947 de 2020 y SL1981 de 2020, se consideró viable dicha sumatoria, reiterando tal postura en la sentencia SL2557 de 2020, al ordenar la reliquidación de una pensión de vejez.

Dicho criterio favorece los intereses de los afiliados y pensionados y no atenta contra la sostenibilidad financiera del Sistema, siendo de obligatorio acatamiento para los jueces de inferior jerarquía, quienes acorde con la Constitución<sup>7</sup> y la Ley<sup>8</sup>, estamos investidos de la facultad de interpretar la demanda y calificar jurídicamente los hechos debatidos en el proceso (*iura novit curia*), y en procura de materializar el derecho a la justicia, no estamos atados a las normas jurídicas invocadas por las partes, en tanto que, como conocedores del Derecho y con miras a resolver de fondo la litis, debemos investigar y aplicar las normas que según nuestro saber y ciencia evidenciamos que regulan el caso.

Pese a lo anterior, se tiene que en el archivo denominado “032Memorial”, obra historia laboral de la demandante, en la cual se observa que medió traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAIS-, con posterior regreso al Régimen de Prima Media con Prestación Definida -RPM-.

---

<sup>6</sup> 01PrimeraInstancia; 01Expediente1020140238.pdf, págs. 309/318

<sup>7</sup> Artículos 229 y 230

<sup>8</sup> Artículo 2º de la Ley 270 de 1996

El inciso 5 del art.36 de la Ley 100 de 1993 prevé que el régimen de transición no es aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.

Al estudiar la exequibilidad del inciso, refirió la H. Corte Constitucional en sentencia 789 de 2002 que es condicionadamente exequible “siempre y cuando se entienda que estas disposiciones no se aplican a quienes habían cumplido quince (15) años o más de servicios cotizados, al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social en pensiones de la Ley 100 de 1993, conforme a lo establecido en la parte motiva de esta sentencia. Con todo, el monto de la pensión se calculará conforme al sistema en el que se encuentre la persona” y “en el entendido que el régimen de transición se aplica a quienes, estando en el régimen de prima media con prestación definida, se trasladaron al régimen de ahorro individual con solidaridad, habiendo cumplido el requisito de quince (15) años o más de servicios cotizados al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social en pensiones, y decidan regresar al régimen de prima media con prestación definida, siempre y cuando:

- a) trasladen a este todo el ahorro que efectuaron al régimen de ahorro individual con solidaridad; y
- b) dicho ahorro no sea inferior al monto del aporte legal correspondiente, en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media. En tal caso, el tiempo trabajado les será computado en el régimen de prima media”.

En la **sentencia SU-062 de 2010** la Corte Constitucional, fundada en lo indicado por esta Corporación en las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, manifestó que las personas amparadas por el régimen de transición, condición con la que cumplía la demandante inicialmente, al contar con más de 35 años de edad para el inicio de la vigencia del actual Sistema Pensional, pueden regresar en cualquier tiempo al régimen de prima media, cuando previamente hayan elegido el régimen de ahorro individual o se hayan trasladado a él, siempre y cuando tuvieran al menos 15 años de servicios cotizados a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

De acuerdo con la información que arroja la historia laboral de la demandante, no satisface el requisito de tener cotizadas/laboradas, al menos 15 años antes del inicio de la vigencia del actual Sistema Pensional, pues, sumando las semanas correspondientes a los meses que laboró para la Contraloría, entre el 20 de abril de 1992 y el 30 de agosto de 1992 (18.71 semanas), alcanza 531.14 semanas cotizadas para el 1 de abril de

199, insuficientes para entender que puede recuperar el régimen de transición en cualquier tiempo.

Expuesto lo anterior, es menester advertir que, con anterioridad a esta decisión se han acompañado, providencias con ponencia de la Magistrada Ana María Zapata Pérez, en los radicados 05001310501620090088801 y 05001310500220160001101, donde se pretendió el reajuste de la pensión en virtud de los beneficios dispuestos por el régimen de transición, de personas que lo perdieron por haber suscrito traslado al RAIS y no contar con quince años o más de servicios al momento de entrar en vigencia el Sistema de Seguridad Social en Pensiones de la Ley 100 de 1993, según lo dispuesto en sentencia C789 de 2002, pero que en acogimiento a precedentes de la Corte Suprema de Justicia<sup>9</sup>, desde la segunda instancia se abordó el análisis del presupuesto de eficacia del traslado de régimen pensional del afiliado, con miras a determinar si previo a suscribir dicho acto jurídico, se cumplieron los principios que reglan la libertad de escogencia del sistema, verificando si existió una decisión documentada, precedida de explicaciones sobre los efectos de tal decisión para afirmar que el traslado fue libre, voluntario e informado, y por tanto eficaz, lo cual se auscultó a través de prueba decretada oficiosamente en trámite la segunda instancia a cargo de la AFP del RAIS en que estuvieron afiliados los demandantes, con miras a que indicara si efectuó asesoría antes de la suscripción del formulario, y una vez allegado el formulario de afiliación a dicho fondo y manifestación respecto a que la asesoría se brindó verbalmente y no se contaba con soporte físico, se concluyó en la ineficacia del traslado por haber incumplido el deber del buen consejo, lo que permitió no aplicar lo dispuesto en el inciso 4 del artículo de la Ley 100 de 1993 que consagra la pérdida del régimen de transición solo para las personas que se suscribieron voluntariamente al RAIS, y aplicar así los beneficios del régimen de transición pretendidos con la demanda.

No obstante, lo anterior, esta Ponente considera oportuno recoger su postura y apartarse respetuosamente de lo previamente dispuesto en las providencias referenciadas, así como del precedente dispuesto por la H. Corte Suprema de Justicia, por lo siguiente:

i) Las sentencias emanadas de la H. CSJ, citadas como precedente en las providencias de esta Sala de Decisión, esto es SL 12136 de 2014 y SL 9519 de 2015, prevén que ***“cuando están en juego aspectos tan trascendentes como la pérdida de la transición, y de contera la***

---

<sup>9</sup> Sentencias SL 12136 Rad. 42.292 del 3 de septiembre de 2014 MP Elsy Del Pilar Cuello Calderón, y SL 9519 Rad 55.050 del 22 de julio de 2015 MP. Rigoberto Echeverry Bueno

***imposibilidad de acceder a la pensión de vejez***, se requiere acudir a una hermenéutica que se avenga a los principios que inspiran al sistema y a los regímenes pensionales, en los que se prevé el traslado libre y voluntario, e incluso a las disposiciones que en la ley así lo imponen”, y es en tal sentido que más adelante se advierte que “el juez no puede pasar inadvertidas falencias informativas, menos considerar que ello no es de su resorte, pues es claro que cuando quien acude a la jurisdicción reclama que se le respete el régimen de transición, indiscutiblemente, como se anotó, surge la perentoriedad de estudiar los elementos estructurales para que el mismo opere, es decir, debe constatar que el traslado se produjo en términos de eficacia, para luego, determinar las consecuencias propias”.

En razón de ello, se considera que tales antecedentes no coinciden estrictamente con los casos analizados previamente por esta Corporación, ni en el que hoy nos ocupa, donde se pretende el reajuste o reliquidación pensional por los beneficios consagrados en el régimen de transición, más no de personas que vean afectado su derecho fundamental al mínimo vital, ni la consolidación de requisitos para acceder a la pensión de vejez, como si lo fueron los dos casos analizados por nuestro órgano de cierre en la materia, de manera que en el sublite no se ve vulnerado el derecho pensional de la demandante puesto que ésta ya goza de dicha prestación económica.

Adicionalmente, en una nueva lectura de tal precedente, se considera que esta deriva en vulneración al debido proceso, derecho de contradicción y defensa y acceso a la justicia de quienes integran o no la Litis, como se expone:

**ii)** De las administradoras de fondos de pensiones del RAIS que estuvieron involucradas con la afiliación a dicho régimen de los demandantes, respecto de quienes se está endilgando una omisión al deber de información y asesoría en el acto de traslado, pero que no hacen parte del proceso, sin permitirles ejercer sus derechos como parte, para que de forma oportuna se pronuncien y contradigan las pruebas que tienen en su poder y las allegadas por los demás integrantes de la Litis;

**iii)** De Colpensiones porque dicha pretensión no hizo parte del líbelo introductor, ni fue objeto de discusión en el transcurso del proceso que justificara un fallo extrapetita, por lo que respecto del análisis realizado en segunda instancia respecto a la eficacia del acto jurídico de traslado de los demandantes, no tuvo la oportunidad de oponerse, ni formular excepciones contra ellas; y adicionalmente porque de la declaratoria de ineficacia, se derivan importantísimas consecuencias económicas que deben ordenarse en favor de Colpensiones con miras a garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y que cuente con los recursos

suficientes para los reconocimientos económicos que quedarán a su cargo, por lo que adoptar dicha postura, coloca a dicho ente en imposibilidad de recuperar los conceptos que se ordena devolver en virtud de la ineficacia de traslado, ello, porque no hay vinculación de los fondos privados, y sobre ellos no tiene efectos la sentencia.

Por las razones expuestas, de forma respetuosa esta magistrada recoge la postura que en contrario hubiere emitido dentro de otro(s) proceso(s), para concluir en que no había lugar a reliquidar la pensión de la demandante en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, como interpretó la A-quo, por lo cual debió **confirmarse** la sentencia venida en consulta.

Con el acostumbrado respeto,

La Magistrada,

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'MP/G'.

**MARIA PATRICIA YEPES GARCÍA**